

PRESIDENCIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS

Expediente gubernativo n.º 69/2025

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL RECURSO INTERPUESTO ANTE LA SALA DE GOBIERNO DEL TSJ DE CANARIAS POR D. JUAN MANUEL HERMO COSTOYA, MAGISTRADO TITULAR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE TELDE, CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR LA MAGISTRADA DECANA DEL PARTIDO JUDICIAL DE TELDE DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025.

A.- Antecedentes y acto impugnado

1.- D. Juan Manuel Hermo Costoya, magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Telde, ha interpuesto ante esta Sala de Gobierno recurso de alzada frente al acuerdo adoptado por la decana del partido judicial de Telde de fecha 19 de febrero de 2025.

En concreto, al acuerdo adoptado denegaba la convocatoria de la Junta Sectorial de Primera Instancia del partido judicial de Telde que interesaron cuatro de sus integrantes con el objeto de proponer, como normas de reparto, cinco de los seis criterios que anteriormente se trataron como criterios interpretativos.

2.- Considera el recurrente que no es potestativo para la Sra. decana la convocatoria interesada atendidos los términos del artículo 66 del Reglamento 1/2000: “La convocatoria de la Junta la efectuará el decano de oficio o a requerimiento de la cuarta parte de los jueces que la integren como miembros de derecho y que en ese momento estén ejerciendo en la población.”

B.- Normativa de aplicación

- El artículo 88 del acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, dispone:

“Será de aplicación a los acuerdos de los jueces decanos lo previsto en el artículo 59 del presente Reglamento para los acuerdos de los presidentes de tribunales y audiencias.”

- Por su parte, el artículo 59 del mismo Reglamento preceptúa lo siguiente:

“1. A los actos de los Presidentes de los Tribunales, Audiencias y Salas les será de aplicación lo establecido en este Reglamento para los actos de las Salas de Gobierno.

2. Sus acuerdos serán comunicados al Consejo General del Poder Judicial, a efectos de su conocimiento y control de legalidad. Contra dichos acuerdos cabe recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, o recurso de revisión, en su caso, en cuanto lo permita la naturaleza de dichos actos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento para la impugnación de acuerdos de las Salas de Gobierno y, con carácter supletorio, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con independencia de su revisión de oficio por el Pleno del Consejo General de acuerdo con los artículos 102 y siguientes de la misma Ley, en los supuestos previstos en dichas normas y por los trámites establecidos en las mismas. Las actuaciones informativas o de gestión material que resulten del ejercicio de su potestad de oír las quejas que les hagan los interesados en las causas o pleitos, conforme a lo dispuesto en el artículo 160, número 13, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento 1/1998, del Consejo General del Poder Judicial, por su específica naturaleza, no serán susceptibles de recurso, salvo que por su contenido material afecten a derechos e intereses determinados.”

- El artículo 14 de la citada norma reglamentaria establece:

“1. Contra los actos de las Salas de Gobierno, constituidas en Pleno o en Comisión, podrá interponerse recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, recurso de revisión, en los plazos, formas y por los motivos que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la misma Ley, lo permita la naturaleza de dichos actos. Igualmente podrá procederse a su revisión de oficio por el Pleno del Consejo General de acuerdo con los artículos 102 y siguientes de la misma Ley, en los supuestos previstos en las mismas normas y por los trámites establecidos en ellas.

2. En cuanto a la obligación de resolver, plazo para dictar resolución expresa y régimen de los actos presuntos, se estará a lo establecido en la Ley 30/1992. En ausencia de regulación expresa, los actos que se refieran a solicitudes y peticiones se entenderán dictados en sentido desestimatorio, una vez transcurrido el plazo establecido para resolver sobre los mismos.

3. Los actos de las Salas de Gobierno serán ejecutivos, sin perjuicio del régimen de impugnación previsto.”

- El artículo 116 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone:

“Serán causas de inadmisión las siguientes: a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”.

- Art. 14.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

“El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.”

C.- Propuesta de resolución

Conforme sale de la normativa transcrita, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias carece de competencia para resolver los recursos de alzada interpuestos contra acuerdos adoptados por los decanos en el ejercicio de sus facultades gubernativas, correspondiendo su conocimiento al Consejo General del Poder Judicial.

No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 116 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, remítase dicho recurso al Consejo General del Poder Judicial por ser el órgano competente para su resolución, notificando al interesado esta circunstancia.